



Semana temática: Agua para la vida.

Eje temático: 7. Comunicación, agua y salud.

Título de la ponencia: *Los medios de comunicación y la nueva cultura del agua*

Autor: Joan Busquet, subdirector de 'El Periódico de Catalunya'
(Consell de Cent, 425-427, 08009 Barcelona. 93 265 53 53.
Correo electrónico: jbusquet@elperiodico.com)

Resumen:

La falta de agua y la amenaza de la sequía han puesto de relieve la creciente atención de los medios de comunicación por los problemas medioambientales, pero también han mostrado las dificultades de los periodistas por transmitir a los ciudadanos conocimientos complejos y por facilitarles instrumentos para interpretar de forma crítica informaciones a menudo parciales, confusas, tramposas, interesadas y partidistas. La ponencia parte del análisis del tratamiento que la prensa española ha dado a la amenaza de restricciones en el área de Barcelona, aboga por una información permanente sobre la sequía y sus efectos --que incluya aspectos relativos a la calidad de las aguas y a la protección de los ecosistemas-- y subraya la necesidad de que los medios contribuyan, con rigor, independencia y respeto al pluralismo, a fomentar la conciencia ecológica de la sociedad.

Palabras clave: Sequía, medios de comunicación, conciencia ecológica.

La amenaza de la sequía ha sacudido recientemente a la sociedad catalana y a parte de la española. Nunca como esta primavera, con los embalses de Catalunya al 20% de su capacidad y la sospecha inequívoca de restricciones, han sido tan conscientes los ciudadanos de los peligros de la falta de agua. Y nunca han puesto tanto de su parte para sortear la amenaza. Este es un mérito indudable del Gobierno de la Generalitat, que había fijado criterios claros de planificación y gestión de los recursos hídricos y había implicado en esta tarea a algunos sectores sociales y, naturalmente, a los medios de comunicación. No es mi propósito juzgar la política de la Administración autonómica –ni del Ministerio de Medio Ambiente– en esta materia, pero quiero empezar subrayando que por primera vez en casi treinta años de autonomía, la Generalitat –que hasta hace poco fiaba el abastecimiento a la lluvia y a las rogativas– ha elaborado planes antisequía rigurosos, basados en la reducción de la demanda, y ha conseguido transmitir a los ciudadanos la necesidad imperiosa de ahorrar agua. Baste decir que hoy Barcelona es una de las ciudades del mundo donde más se ha reducido el consumo doméstico, casi el 4% en tres años, y que está cerca del nivel óptimo de los 110 litros por persona, frente a los 666 de Pekín, los 503 de Nueva York, los 200 de Milán, los 162 de París y los 140 de Madrid.

Tampoco los medios de comunicación habían prestado tanta atención ni habían tratado con tanto rigor el desafío de la sequía. Basta una ojeada a la prensa para comprobarlo. Tal vez por esta razón resulta, cuando menos, sorprendente que, una vez recuperados los embalses gracias a las generosas precipitaciones de mayo y una vez alejado el fantasma de la sequía, lo que haya quedado como una foto fija en la opinión pública sea el convencimiento de que los responsables de la autonomía catalana han fracasado en la gestión de la crisis. Ello se debe, sin duda, a las sonoras divergencias y al griterío de los tres partidos que forman el Gobierno y a las tensiones internas en dos de ellos. También puede atribuirse a la falta de sintonía y a las dificultades de coordinación entre las autoridades autonómicas y el Gobierno español. Pero las razones más claras del fracaso son, a mi juicio, la falta de transparencia y los graves errores de comunicación en que ha incurrido la Generalitat, que han arrastrado a la prensa y han confundido a los ciudadanos.

El miedo a las palabras

Una de las manifestaciones de la falta de transparencia es el empleo de eufemismos con los que se pretende esconder la realidad. Algunas palabras apenas se pronuncian y si no hay más remedio que pronunciarlas se recurre a adjetivos edulcorantes. Es el caso del término *trasvase*. El Gobierno del PSOE –que hizo bandera de su oposición a los trasvases– ha promovido transferencias de recursos hídricos del Tajo al Guadiana, del Júcar al Vinalopó, del Guadiana al Guadalquivir y, más recientemente, del Ebro al Llobregat. Se trata de operaciones destinadas a llevar agua de unas cuencas a otras, es decir, de trasvases. Pues bien, los promotores de tales operaciones se refieren a ellas con voces y expresiones eufemísticas como *conducción*, *conexión*, *tubería*, *tubo*, *cañería*, *captación*, *transfusión*, *interconexión reversible de redes*, *reasignación temporal de caudales*, *cesión de derechos de usos privativos*, *readscripción del destino del agua* y otros enmascaramientos y disfraces. El consejero de la Generalitat catalana Francesc Baltasar declaró a finales de marzo, a propósito de estos ejercicios de ingeniería lingüística, que los diccionarios “se amoldan a los usos, y como no hay precedentes de una captación provisional (se refería a la traída de agua del Ebro a Barcelona), no existe aún una palabra que la defina”. Pero la palabra existe y es *trasvase*, esto es, acción y efecto de traspasar, de “pasar un líquido de un recipiente a otro”. Otra cosa es que, por razones comprensibles, los responsables políticos –que no siempre actúan como políticos responsables– huyan de ella como de la peste. Exactamente lo contrario –dicho sea de paso– de lo que hacen los partidos que en su día, antes de la llegada de los socialistas al poder, convirtieron los trasvases en una panacea y los que, aún hoy, sostienen contra viento y marea la necesidad de recurrir al agua del Ródano para poner fin a la sequía en Catalunya.

Al consejero Baltasar y al Gobierno catalán —que, como se ha dicho, han impulsado un efectivo cambio de modelo en la política del agua— les ha jugado una mala pasada la falta de transparencia que ha caracterizado su gestión y la de la Administración central en este asunto. Parece evidente que para los 5,5 millones de personas del área barcelonesa afectadas por la sequía era preferible un trasvase temporal, inspirado en la práctica de los bancos de agua, como el previsto entre Tarragona y Barcelona, que afrontar el riesgo de restricciones, con graves repercusiones de tipo social e incluso en el ahorro de agua, ya que, como es sabido, las restricciones acaban dañando tuberías y conducciones. Pues bien, la Generalitat —y con ella la ministra de Medio Ambiente—, en lugar de explicar sin ambages que las consecuencias de los cortes de agua serían peores que las que se derivarían de un pequeño trasvase, optó por explicaciones vergonzantes que desconcertaron a los ciudadanos y que alentaron conflictos larvados entre territorios, exactamente lo contrario de lo que pretendía evitar.

La falta de transparencia

Esta experiencia muestra que cualquier política responsable del agua exige transparencia, como pide la directiva marco de la Unión Europea. Sin transparencia ninguna medida, aun la más apropiada, resulta creíble. La opacidad, la falta de información veraz y los disfraces pueden hipotecar e incluso echar por tierra el mejor de los planes hidrológicos, el más atento a las necesidades de la población y el más respetuoso con el medioambiente. La transparencia, pues, es imprescindible para que la sociedad haga suya la lucha contra la sequía.

Pero la transparencia no solo incumbe a los políticos y a los técnicos que de ellos dependen. También obliga a los medios de comunicación. El análisis de las noticias relativas a la reciente crisis hídrica de Catalunya revela, como ya se ha dicho, la creciente atención de los medios, sobre todo de la prensa, por los problemas medioambientales y muestra una mayor preocupación por transmitir a los ciudadanos conocimientos complejos como los que se refieren a la gestión del agua. Pero hay que reconocer que todavía hoy muchas de las informaciones que se difunden son parciales, confusas, tramposas, interesadas y partidistas. ¿Por qué? En primer lugar, porque la distancia entre los conocimientos de que disponen los técnicos y los que muestran los periodistas es aún muy grande. No se trata de exigir a los informadores que se conviertan en expertos en la materia, pero sí es aconsejable una mayor especialización que les permita interpretar de forma crítica los datos que les llegan. Resulta alarmante que muchos profesionales tomen lo hídrico por lo hidráulico y lo hidrográfico por lo hidrológico. *Hidráulico* es lo relacionado con la hidráulica, es decir, la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos, e *hídrico* es lo relacionado con el agua. *Hidrográfico* es lo relacionado con la hidrografía, esto es, la parte de la geografía que trata de las corrientes de agua, e *hidrológico* es lo relacionado con la hidrología, la parte de la ciencia que trata de las aguas. Pues bien, es frecuente que al referirse a las reservas de agua, los medios, en lugar de hablar de los recursos hídricos, lo hagan de los “recursos hidráulicos” o de los “recursos hidrológicos”. Y que llamen *planes hidrográficos* y no hidrológicos, como debieran, a los que tratan de los usos, distribución y circulación del agua en una cuenca determinada. Tampoco es extraño que se confundan los verbos *desalar* y *desalinizar*, como si quitarle la sal al bacalao fuera lo mismo que quitársela al agua del mar o a las aguas salobres para hacerlas potables.

Una expresión que demuestra la incompetencia de algunos medios es el latiguillo recurrente *agua de boca*. Ningún diccionario registra esta rareza. La locución “de boca” tuvo un empleo antiguo, aunque escaso, con función de adjetivo —“almacenes de boca”, “recursos de boca”, “munición de boca”—, pero nunca relacionada con el agua. Sin embargo, esta extravagancia se ha esparcido como un infundio en los meses de sequía en Catalunya. Algunos de sus conspicuos propaladores sostienen que está justificada porque da respuesta a la necesidad de matizar un significado: agua que se puede beber y utilizar en la preparación de los alimentos, y no solo en consumos domésticos en general, como la limpieza. Pero quienes insisten en utilizar una locución tan prestigiosa parecen ignorar que en español hay un adjetivo diáfano aplicable al caso: *potable*. Claro que si algo sencillo se puede complicar, la tentación resulta irresistible:

¿para qué conformarnos con la consabida “agua potable” si podemos recurrir a una expresión más estruendosa?

Estos ejemplos evidencian las resistencias de los periodistas a dar a cada cosa el nombre que le corresponde, en aras de una supuesta competencia técnica. Pero son una manifestación de un fenómeno más amplio: muchos profesionales se limitan a difundir las noticias que les transmiten los representantes de los partidos políticos y los altos cargos de la Administración, mediatizadas por ellos y utilizadas con frecuencia como arma partidista. De modo que, sin pretenderlo, trafican con información adulterada. No abogamos por extender la especie de que no debe creerse ninguna información hasta que haya sido oficialmente desmentida. Al contrario, los ciudadanos tienen derecho a conocer las opiniones de los políticos y los periodistas deben ser respetuosos con ellos. Pero, en la materia que nos ocupa –y en otras más o menos complejas– los políticos son la peor fuente de información, no solo porque con frecuencia carecen de ella, sino sobre todo porque son arte y parte en el debate. Y sin embargo, las agencias de noticias, la radio, la televisión y, en menor medida –por fortuna– los periódicos, se nutren de declaraciones de políticos cuyo propósito no es informar, sino crear una corriente de opinión favorable a sus intereses. En pocos asuntos como este se manifiesta tan a las claras la quiebra del llamado periodismo de declaraciones.

El agua como pretexto

Esta forma de periodismo contribuye claramente a acentuar el tono alarmista, cuando no abiertamente belicoso, que adquieren las noticias sobre el agua y la falta de ella. En solo una semana, la de 19 al 24 de mayo, la expresión “guerra del agua” apareció veintisiete veces en los titulares de los cinco principales diarios nacionales, acompañada casi siempre de voces que remiten a desgracias y adversidades: sequía, escasez, falta, crisis, alerta, caída, empeoramiento, pérdida, sed, ruina, calamidad, aridez, desecación, etcétera.

En el uso de estos vocablos y otros parecidos apenas hay diferencias entre los medios. En cambio, sí se observan en el tratamiento de las noticias. Como muestra, un botón. La llegada a Barcelona –el 14 de mayo-- del primer barco aljibe contratado por la Generalitat coincidió con la noticia de que las lluvias habían aumentado en más de 20 hectómetros cúbicos las reservas de la ciudad. Así dieron los principales diarios españoles esta información: *Abc*: “Barcelona empieza a recibir agua en barcos, también para llenar piscinas”; *El Mundo*: “El tripartito gasta 53 millones en barcos de agua que no necesita tras las últimas lluvias”; *El País*: “Las lluvias acaban con la restricción para regar y llenar piscinas”; *El Periódico*: “Las lluvias obligan a Medi Ambient a relajar las restricciones de agua fijadas en febrero”; *La Razón*: “Agua en los barcos y en las piscinas”; *La Vanguardia*: “Barcelona recibe el primer barco con agua el día [en] que el Govern anuncia que levantará la prohibición de regar y llenar piscinas”; *Público*: “Barcelona empieza a recibir agua por barco”. Así que mientras unos diarios se limitan a ofrecer los datos objetivos, con mejor o peor acierto, otros los utilizan para poner en solfa al Gobierno catalán a cuenta del peligro de restricciones. Como se ve, también en la prensa, y no únicamente entre los partidos, la sequía es un arma política.

Hay que admitir que igualmente se producen diferencias entre los medios a la hora de recurrir a los expertos. Algunos de ellos apenas lo hacen, salvo en casos excepcionales, y para arrimar el ascua a su sardina. Otros sí, y es justo reconocer que cada vez más. Pero en general la participación de los especialistas en las informaciones sobre los problemas del agua es escasa en relación con el espacio que estas ocupan en los diarios y en los informativos de radio y televisión. Muchos periodistas ni siquiera echan mano de las informaciones del Observatorio Nacional de la Sequía --accesible desde la web del Ministerio de Medio Ambiente--, que, por lo rigurosas, huyen del modelo de comunicación confusa, imprecisa o poco elaborada de otros organismos oficiales. Y, sin embargo, para los periodistas es imprescindible recurrir a los ecólogos y otros científicos competentes, por las razones apuntadas y porque solo con la

asistencia de los expertos adquirirán la especialización necesaria para evitar que el ruido acabe ocultando, incluso para ellos, los sonidos de la verdad.

La opinión de los expertos también es imprescindible para la sociedad. Primero, porque sirve de contrapeso al criterio político bajo el que tantas veces quedan sepultados los hechos relevantes. Y segundo, porque contribuye a que los ciudadanos adquieran la conciencia necesaria para convertir la lucha contra la sequía en asunto propio. En esta tarea los medios de comunicación tienen un papel fundamental, pues lo que saben del agua la mayoría de los ciudadanos se limita a lo que los medios les transmiten.

Entre los periodistas está muy extendida la idea de que el ejercicio honorable de su oficio les impide tomar partido (aunque lo toman, como hemos visto). Y esta concepción se da la mano con otra, no menos discutible: la de que las noticias pueden dejar de serlo de un día para otro: basta con que pierdan atractivo. En el caso que nos ocupa es significativo que en cuanto las lluvias y el aumento de las reservas de los embalses han alejado el temor de las restricciones, la palabra *sequía* ha desaparecido de los titulares de los periódicos. Y lo más probable es que no reaparezca hasta que un próximo episodio encienda de nuevo todas las alarmas y ponga a políticos y periodistas en pie de guerra.

La “socialización de la incertidumbre”

Los medios de comunicación –esto es, quienes trabajan en ellos– no pueden ignorar que vivimos en un país mediterráneo y que el clima mediterráneo nos obliga a convivir con la sequía. Tampoco pueden soslayar que el cambio climático reduce progresivamente los recursos hídricos. Y que el crecimiento desmesurado de la población y la ocupación desenfundada del territorio producen graves problemas no solo de abastecimiento de agua, sino también de transportes, de salud y otros servicios, y son un torpedo en la línea de flotación de los equilibrios necesarios para que la vida de las personas sea digna de tal nombre. Los periodistas no han de renunciar, en nombre de una neutralidad que nadie les exige, a lo que algunos autores llaman la “socialización de la incertidumbre”, a la comprensión de que el agua es un bien valioso y escaso que hay que defender a toda costa y al conocimiento de que el abastecimiento de la población debe hacerse compatible con la conservación de los valores ambientales.

Dicho de otro modo: los medios de comunicación tienen la responsabilidad de contribuir a la formación de la conciencia ecológica de la sociedad. Y eso les obliga a romper con la rutina de acordarse de santa Bárbara únicamente cuando truena, es decir, de hablar de los problemas de agua solo cuando nos amenaza la sequía. ¿Qué ocurre con el consumo? ¿Por qué aumenta hasta niveles insostenibles? ¿En qué medida lo hace a causa del modelo de crecimiento? ¿Qué consecuencias tiene este aumento en la vida y la salud de la población? ¿Qué pasa con los acuíferos? ¿Qué efectos tienen los pozos ilegales sobre los manantiales y las fuentes que alimentan ríos y humedales? ¿Cuáles son los efectos de los regadíos sobre los caudales ambientales de los ríos? ¿Qué sucede con el riego a manta, que se usa en el 75% de la superficie de cultivo? ¿Y con los fertilizantes y pesticidas que contaminan el agua de riego que no se evapora? ¿Es sostenible que España –país mediterráneo y, por tanto, con sequía– tenga más de tres millones de hectáreas de regadío? ¿Por qué razón no han llegado a la agricultura procesos de modernización y reconversión ordenados y sin graves daños laborales como los que los poderes públicos han emprendido en sectores como la minería, la pesca, los astilleros y la siderurgia? A estas y otras preguntas, tanto o más pertinentes, han de contribuir a dar respuesta los medios de información, sea cual sea el nivel de los embalses, haya o no peligro de restricciones y desabastecimiento.

La quiebra del modelo de la oferta

Los periodistas deben huir de una concepción patrimonial de la información, equivalente, mutatis mutandis, al grito “El agua es nuestra”, propio del siglo XIX, con que algunos dirigentes

de organizaciones territoriales o agrícolas descalifican las medidas preventivas y correctoras de la sequía. Y cuando dan audiencia a tales representantes, deben tener en cuenta que mientras las ciudades y la industria precisan el 20% del agua disponible y recaudan el 95% del dinero que sirve para pagar los servicios correspondientes, el campo y la agricultura consumen el 80% y contribuyen solo con el 5% de los costes. Y ello, sin caer en la tentación de aguzar el enfrentamiento entre derechos del campo y la ciudad con que a veces se presentan las noticias sobre el uso y el provecho de agua agrícola.

Los medios de comunicación, en definitiva, no pueden pasar de puntillas, como si con ellos no fuera la cosa, sobre el debate entre el llamado “modelo de la oferta”, basado en el cemento y las infraestructuras, que ha primado hasta ahora en la gestión del agua, y las propuestas centradas en el control de la demanda. La crisis hídrica de Catalunya ha producido ríos de tinta sobre el estado de los embalses, los bancos aljibe y, sobre todo, los trasvases. Pero en los medios apenas han tenido eco iniciativas –algunas de ellas pioneras– de la Agència Catalana del Agua, organismo oficial que depende de Medi Ambient, orientadas al ahorro y la disminución del consumo, al aumento de los recursos, a la conservación o restauración de los ecosistemas acuáticos y a la producción de bancos de agua. Me refiero, entre otras decisiones, al reparto masivo de reguladores de presión en los hogares, a la recuperación de pozos y acuíferos, a la regeneración de aguas depuradas y a la apuesta decidida por las desalinizadoras.

La utilidad del periodismo

Este hecho puede parecer sorprendente, pero no lo es si tenemos en cuenta que las proposiciones alternativas de la nueva cultura del agua tropiezan con un modelo de periodismo que ha envejecido con el tiempo y que resulta muy poco útil a la sociedad: el modelo basado en las informaciones y declaraciones de los políticos, en el desprecio por la especialización y en las concesiones al alarmismo. Y es menos sorprendente todavía si a las autoridades y a los políticos espantados, aun los más fieles intérpretes de la directiva marco europea, les falta coraje, por motivos electorales u otros igualmente respetables, para poner el pie del lado de quienes consideran que el agua es un bien escaso, un derecho humano básico, y no un recurso inagotable ni un negocio. Pero ni el apocamiento ni la opacidad de los responsables de la Administración deben servir de coartada a los periodistas y a los medios para hacer dejación de sus responsabilidades profesionales y sociales en este y en otros asuntos en los que está en juego el futuro de la naturaleza y de la vida. Ellos son los primeros que deben recordar –y hacer que la sociedad no olvide— que más de 1.200 millones de personas, el 23% de la humanidad, ni siquiera tienen acceso al agua potable.

En lo fundamental, la mayor parte de estas consideraciones no son nuevas. Se pusieron sobre la mesa en el encuentro *Mediterráneo, agua y sequías*, que se celebró en Zaragoza hace dos años, y en el Foro Internacional sobre la Sequía, que tuvo lugar el año pasado en Sevilla, y a ellas me he de remitir forzosamente ya que la reciente crisis del agua en Catalunya no ha hecho más que demostrar su validez. De modo que termino esta breve exposición agradeciendo a los responsables de la Expo y a todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de recordarlas.

Muchas gracias.